

Santiago, catorce de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, en causa RUC 1900230549-9, RIT N° 75-2021, por sentencia de seis de enero del año en curso, condenó a Dany Brian Araníbar Fernández y a Ricardo Jesús Vargas Ancavil, cada uno a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio, y a Hugo Antonio Garcia Calquín, a la pena de trece años de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autores de tres delitos de robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, todos en grado consumado, perpetrados los días 15 de febrero de 2019, 7 de marzo de 2019 y 14 de marzo de 2019, en la comuna de San Bernardo.

La misma sentencia condenó a Dany Brian Araníbar Fernández a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor de un delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso bélico, en grado consumado; a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autor de un delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en grado consumado y; a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de tenencia ilegal de municiones,



en grado consumado, todos perpetrados el día 29 de mayo de 2019, en la comuna de San Bernardo.

Se dispone que los sentenciados Dany Brian Araníbar Fernández, Ricardo Jesús Vargas Ancavil, y Hugo Antonio Garcia Calquín, deberán cumplir efectivamente las penas privativas de libertad impuesta, sirviéndoles de abono el tiempo que indica y se los exime del pago de las costas de la causa.

Las defensas de los acusados Dany Brian Araníbar Fernández, Ricardo Jesús Vargas Ancavil, y Hugo Antonio Garcia Calquín, dedujeron recursos de nulidad contra dicha sentencia, los que fueron admitidos a tramitación, celebrándose para su conocimiento la audiencia del día veinticinco de mayo pasado, según da cuenta la respectiva acta agregada a estos autos.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la defensa de Dany Brian Araníbar Fernández y Ricardo Jesús Vargas Ancavil, invoca como causal única del recurso, la contemplada en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, denunciando la transgresión del debido proceso en relación a los artículos 1, 276, 291, 329, 330 y 334 del Código Procesal Penal, pues no obstante, la prohibición expresa del artículo 334 del cuerpo legal citado que impide durante el juicio la lectura de registros y documentos que dan cuenta de diligencias y actuaciones policiales, salvo las excepciones legales, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, lo permitió.

Justifica su razonamiento en el hecho que los funcionarios Antonio de Jesús Saúl Valdés y el inspector Esteban Andrés Castro Valdebenito, introdujeron al juicio a propósito de la elaboración del Informe Policial de 29 de mayo de 2020, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, de la Policía de Investigaciones de Chile, mapas de georreferenciación, cuadros



gráficos de mallas de red de conexión y tablas Excel, lo que transgrede los principios formadores de la oralidad e inmediación.

Concluye que sin dicha improcedente actuación no resultaba posible llegar de manera alguna a las conclusiones que se dan por sentadas en las consideraciones séptima y décima del fallo impugnado, pues no existe una fuente independiente que permita sostener que las SIM CARD que se mencionan en los registros policiales pertenecen o fueron utilizadas por sus representados

Termina describiendo la influencia que estos yerros han tenido en lo dispositivo del fallo, solicitando acoger el recurso impetrado a favor de Dany Brian Araníbar Fernández y Ricardo Jesús Vargas Ancavil, se anule la sentencia y el juicio que le antecedió, debiendo retrotraerse la causa al estado de celebrase una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado.

SEGUNDO: Que, por su parte, la defensa de Hugo Antonio Garcia Calquín esgrimió como causal del recurso de nulidad, la contemplada en el artículo 374 e) del Código Procesal Penal, esto es, *“cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)”*, en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal, para establecer la supuesta participación de su representado como autor de los hechos.

Desarrollando los motivos de su agravio, en primer lugar cuestiona el origen de las escuchas telefónicas, pues el propio Inspector Castro Valdebenito indicó que las iniciales pesquisas a su representado se realizaron en un teléfono que no se encontraba intervenido por la Policía de Investigaciones. Agrega que tampoco existen antecedentes que comprueben que entre las



voces de las escuchas telefónicas una de ellas corresponda a Hugo García Calquín.

Enseguida cuestiona los razonamientos del tribunal para establecer la participación de los acusados, pues a diferencia de lo que tuvieron por configurado los jueces del grado, las interceptaciones telefónicas no permitieron asentar con exactitud la ubicación física de ninguno de los acusados, entre ellos, la de Hugo García Calquín. Por ello, -según afirma el recurrente- sus posiciones se fijaron únicamente en base a especulaciones policiales de las llamadas salientes y entrantes en un perímetro aproximado a los domicilios afectados.

Asimismo, reprochó que los sentenciadores dieran por establecido que Dany Aranibar Fernández mantuvo conversaciones con un individuo apodado como “tío Hugo” y que al efectuar las consultas asociado a la compañía WOM se obtuvo como respuesta que era utilizado por Hugo Antonio García Calquín, pues en ninguna de las reproducciones que se verificaron en la audiencia de juicio, se escucharon referencias a un “tío Hugo” y tampoco consta de su registro escrito.

Finalmente, cuestiona la credibilidad del reconocimiento efectuado por el testigo de iniciales JLMP respecto de su representado, quien lo sindicó en unos dibujos de rostros, aun cuando las características que este testigo refirió difieren con los retratos que le exhibieron.

Afirma que por las falencias evidenciadas, la estructura argumental vertida en la sentencia carece de las consideraciones que manifiesten los motivos que permitieron a la magistratura tener por configurada la participación de Hugo García Calquín.



Con esos argumentos, finaliza solicitando la nulidad del juicio y la sentencia y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por un tribunal no inhabilitado.

TERCERO: Que para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, es conveniente recordar los hechos que la sentencia impugnada tuvo por acreditados. Estos son:

HECHO N° 1

“Que, el día 15 de febrero de 2019, aproximadamente a las 16:30 horas, los imputados Dany Brian Araníbar Fernández, Hugo Antonio García Calquín y Ricardo Jesús Vargas Ancavil previamente concertados para ello, se trasladaron hasta el domicilio, tipo casa habitación, de calle Borde Cerro Negro N° 16253, de la comuna de San Bernardo, correspondiente a la víctima de iniciales P.A.C.C., a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Spark GT, que portaba las placas patentes DBVX-41, el que era conducido por el imputado Hugo Antonio García Calquín. Una vez en dicho lugar, el imputado Hugo Antonio García Calquín ejerció labores de vigilancia y cobertura, en tanto que los imputados Dany Brian Araníbar Fernández y Ricardo Jesús Vargas Ancavil, ingresaron vía fractura de cierre perimetral y de puerta de acceso para luego en su interior apropiarse con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño de un televisor marca LG, de 43 pulgadas, para luego retirarse del lugar, con la referida especie, en dirección desconocida.”.

HECHO N° 2

“Que, el día 07 de marzo de 2019, en horas de la tarde, los imputados Dany Brian Araníbar Fernández, Hugo Antonio García Calquín y Ricardo Jesús Vargas Ancavil previamente concertados para ello, se trasladaron hasta el domicilio, tipo casa habitación, de Avenida Condell N° 1655, de la comuna de



San Bernardo, correspondiente a la víctima de iniciales P.M.F.A., lugar al cual ingresaron a vía fractura de candado que aseguraba cierre exterior, para luego en su interior apropiarse con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño de diversas especies, tales como 01 televisor tipo led, marca AOC, de 55", de color negro; 01 televisor tipo led de 32", marca Sony, de color negro; 01 televisor tipo led de 29", marca Hobby, de color negro; 01 equipo de música, 01 ukelele, 01 notebook; 01 equipo de música, marca Sony; diversas prendas de vestir; \$200.000 en efectivo; 01 minipimer marca Thomas, 01 procesador de comida, marca Thomas, y diversas joyas de plata, para luego retirarse del lugar, con las referidas especies, en dirección desconocida."

HECHO N° 3

"Que, el día 14 de marzo de 2019, aproximadamente a las 17:00 horas, los imputados Dany Brian Araníbar Fernández, Hugo Antonio García Calquín y Ricardo Jesús Vargas Ancavil previamente concertados para ello, se trasladaron hasta el domicilio, tipo casa habitación, de Pasaje Mañihuales N° 14145, de la comuna de San Bernardo, correspondiente a la víctima de iniciales A.C.P.C., lugar al cual ingresaron vía fractura de candado que aseguraba portón de acceso, para luego en su interior apropiarse con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño de diversas especies, tales como 01 televisor marca Next de 40 pulgadas; 01 televisor, marca Samsung, de 32 pulgadas, una consola de juegos, marca Xbox One, de color blanco; una consola de juegos, marca Xbox 360, de color negro; una alcancía con \$70.000 (setenta mil pesos) en efectivo; 1 tablet, marca AOC, para luego retirarse del lugar, con las referidas especies, en dirección desconocida."

HECHO N° 4



El día de 29 de mayo de 2019, aproximadamente a las 06:10 horas, en el domicilio ubicado en pasaje Clarinete N° 10967, comuna de La Pintana, funcionarios de la Policía de Investigaciones, en cumplimiento de una resolución de autorización de entrada, registro e incautación, dictada por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, sorprendieron al imputado Dany Brian Araníbar Fernández, teniendo en su poder y sin contar con la autorización correspondiente las siguientes especies: un arma de fuego convencional tipo pistola marca Browning, N° de serie AZ 18709, calibre 9 x 19 mm.; un arma de fuego convencional tipo pistola marca Loring, N° e serie 061607, calibre .22 LR.; 38 cartuchos calibre 9 x 19 mm.; 18 cartuchos calibre .22 LR; 01 cartucho calibre 38 especial; 03 cartuchos para escopeta calibre 12, y un arma de fuego convencional tipo fusil, con su número de serie borrado, calibre 7 x 57 mm.”.

Estos hechos fueron calificados como tres delitos de robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, en grado consumado, perpetrados los días 15 de febrero de 2019, 07 de marzo de 2019 y 14 de marzo de 2019, en la comuna de San Bernardo; un delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso bélico, un delito de tenencia ilegal de arma de fuego, y un delito de tenencia ilegal de municiones, todos en grado de desarrollo consumados y perpetrados el día 29 de mayo de 2019, en la comuna de San Bernardo.

CUARTO: Que, la causal del libelo de nulidad impetrado por la defensa de los acusados Dany Brian Araníbar Fernández y Ricardo Jesús Vargas Ancavil, como se advierte de su formulación, dice relación con la transgresión de la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República, esto es el debido proceso, al transgredirse lo previsto en el artículo 334 del Código Procesal Penal, con la



incorporación de documentos que dan cuenta de actuaciones policiales, los que además fueron valorados por el tribunal para alcanzar la convicción de condena respecto de la participación de Aranibar Fernández y Vargas Ancavil.

QUINTO: Que, en tal sentido, la sentencia recurrida explicitó que sobre las interceptaciones telefónicas, “declaró el Inspector Castro Valdebenito, quien detalladamente y en forma extensa explicó la forma y procedimiento en que se realizaron las interceptaciones telefónicas, cómo se bajó la información que contienen las planillas Excel, cómo son confeccionados los mapas de ubicación de las antenas a las que se conectaron las SIM CARD de los acusados los días y horas de ocurridos los robos y la forma en que se confeccionaron los cuadros gráficos o mallas de red de conexiones, todos antecedentes que fueron exhibidos al funcionario Castro Valdebenito por el Fiscal”, para luego concluir que todo lo anterior “no transformó la audiencia en un juicio de actas, más bien fue una forma de ilustrar al tribunal del contenido de cada una de las imágenes y de la diligencia por el testigo realizada, y si en algún momento leyó lo que en alguna lámina se exhibía, no había impedimento para ello, dado que no se trataba de oraciones, frases o líneas ahí escritas o que desvirtuaran la declaración o algo que el testigo no hubiera indicado o informado previamente al tribunal”.

SEXTO: Que en lo concerniente a la infracción en examen, conviene reiterar que es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19 N° 3, inciso sexto, le confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo.



Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes, les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas (SCS N° 6902-2012, de 6 de noviembre de 2012, N° 2747-13, de 24 de junio de 2013, N° 6250-2014, de 7 de mayo de 2014, N° 4269-19, de 25 de marzo de 2019, N° 92059-20, de 8 de septiembre de 2020, N° 17297-21 de 24 de mayo de 2021, N° 31859-21 de 1 de octubre de 2021 y N° 92176-21 de 6 de mayo de 2022, entre otras).

SÉPTIMO: Que, en particular, en relación a los reproches efectuados por la Defensa, fundados en la vulneración del artículo 334 del Código Procesal Penal, conviene precisar que en el fundamento séptimo de la sentencia recurrida, consta que el mapa con georreferenciación de antenas confeccionado, el cuadro gráfico malla de red de conexiones y las tablas Excel que contienen el vaciado de los tráficos de llamadas de las SIM CARD interceptadas, supuestamente incorporados con infracción a lo establecido en el artículo 334 antes referido, en realidad fueron introducidos al juicio a través de la declaración prestada por el Inspector Esteban Andrés Castro Valdebenito, quien detalladamente dio cuenta en estrados de las diligencias investigativas en las que le correspondió participar. Así, el testigo detalló que le incumbió efectuar el análisis del tráfico telefónico a los números interceptados de los acusados de autos, producto de lo cual extrajo información del sistema vigía,



explicando que aquel corresponde a la página en que cada compañía registra la información de las comunicaciones del número intervenido, comparando esa búsqueda con la distancia de las celdas de los llamados de los imputados (punto desde donde se origina la llamada, latitud y longitud), que permite posicionar un aparato celular en las inmediaciones de una antena, pesquisas que descargó en formato Excel y luego plasmó en un mapa utilizando la plataforma Google Maps, pruebas que no obstante pudieron formar parte de los antecedentes recopilados por la policía durante la etapa de instrucción, por sí sola y en forma autónoma constituye prueba distinta a los mentados registros, y cuya incorporación al juicio está autorizada como prueba testimonial.

Asimismo, los antecedentes que sirven de fundamento al presente arbitrio, fueron ofrecidos en la audiencia de preparación de juicio oral y luego que la Defensa ejerciera sus prerrogativas para evitar su admisión en la audiencia de juicio oral, se incorporaron al auto de apertura.

Con todo, en este caso, aun cuando se admitiera que dicha prueba se introdujo al juicio infringiendo el citado artículo 334 del Código Procesal del Ramo, lo cierto es que no constituyó el único antecedente incriminatorio que el tribunal valoró a la hora de establecer la participación culpable de los acusados Dany Brian Araníbar Fernández y Ricardo Jesús Vargas Ancavil, por lo que carece de afectación substancial al debido proceso, al no revestir la trascendencia que exige el artículo 375 del mismo cuerpo legal.

OCTAVO: Que, en consecuencia y por las razones antes desarrolladas, las contravenciones denunciadas carecen tanto de sustento fáctico como de la sustancialidad que la hipótesis de nulidad en estudio exige para producir los efectos que le son propios, esto es, que sea insalvable ante el derecho al



debido proceso conforme ya se explicitó en los razonamientos que anteceden, razones por las cuales el presente recurso será desestimado.

NOVENO: Que respecto al arbitrio impetrado por la defensa de Hugo Antonio Garcia Calquín, explicitado a través de la proposición de la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en armonía con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo de leyes, cabe reiterar que ella se refiere a la omisión, en la sentencia, de alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, indicando que ello ocurre en relación a los elementos que la letra c) de esta última disposición ordena observar, esto es: *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de prueba que fundamentare dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*. A su vez, esta última norma prescribe *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”*.

A juicio de la defensa, la sentencia infringe los principios de la lógica, en específico la razón suficiente, producto de una fundamentación que no



satisface la prueba de cargo, para establecer la participación de acusado Hugo García Calquín como autor de tres delitos de robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, todos en grado consumado, perpetrados los días 15 de febrero de 2019, 7 de marzo de 2019 y 14 de marzo de 2019, en la comuna de San Bernardo.

DÉCIMO: Que, sobre la motivación de una sentencia, como lo ha señalado esta Corte Suprema, se ha resaltado la importancia que todo fallo cumpla con los fundamentos de claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos (Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo XXV, Sección 1ª., pág. 156, año 1928). En esto ha resuelto la jurisprudencia nacional que hay ausencia de fundamento tanto cuando este se encuentra ausente, como cuando la ausencia es parcial o son insuficientes los expresados, al igual que en el evento de existir incoherencia interna, arbitrariedad y falta de razonabilidad; y que la motivación de las sentencias constituye una faceta o cariz de un justo y racional procedimiento como exige nuestra carta fundamental, que debe cumplirse, por ser esta la ocasión en que el Estado, por medio del órgano jurisdiccional, responde al derecho de petición y especialmente a la acción intentada en el proceso, lo cual, sin duda, debe tener en consideración el tribunal superior al revisar eventualmente la decisión (SCS Rol N° 8314-09 de 27 de enero de 2011; Rol N° 8167-08 de 21 de diciembre de 2010; Rol N° 3696-08 de 21 de diciembre de 2010, Rol N° 32859-21 de 19 de octubre de 2021).

Toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente



en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo (entre otras, SCS N°s 14.491-2021, de 13 de abril de 2021; y, 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020).

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera —y no de otra—, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal comprensión se ajusta a la concepción racionalista o cognoscitivista, que entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de la verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos conforme a las relaciones inferenciales que existen entre ellas y las pruebas disponibles (Cortés-Monroy, Jorge. La “valoración negativa” como exclusión de la prueba ilícita en el juicio oral”, en Revista Ius et Praxis, vol. 24, N° 1, 2018, p. 663).

UNDÉCIMO: Que, en relación a las argumentaciones de la defensa, debe aclararse que las señaladas transgresiones no son tales, lo que se



deduce de la sola lectura del fallo impugnado, que extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, respecto de la declaración de los testigos, Antonio Suau Valdés, BELN, JLMP y Castro Valdebenito, de la que queda de manifiesto que la molestia real del recurrente está circunscrita a la valoración efectuada por los jueces del fondo, la que no comparte.

Sin embargo, tal actividad se agotó con la determinación que a ese respecto hicieron los jueces del fondo, quienes tras analizar los antecedentes y en uso de sus facultades privativas, concluyeron en su motivación décima que el acusado Hugo García Calquín tuvo participación inmediata y directa en los hechos, coligiendo de ese modo que le cupo participación como autor de tres delitos de robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, todos en grado consumado, perpetrados los días 15 de febrero de 2019, 7 de marzo de 2019 y 14 de marzo de 2019, en la comuna de San Bernardo.

En efecto, según se aprecia de los motivos séptimo y décimo el fallo reproduce los razonamientos que se tuvieron en consideración para llegar a las conclusiones que allí mismo se consigan, donde aparece que los jueces analizaron conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, -contrariamente a lo expresado por el recurrente-, la prueba producida, siendo plenamente aplicable a este efecto la regla general sobre libertad de prueba de los artículos 295 y 297 del Código Procesal Penal (DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristian, *Proceso Penal*, Ed. Jurídica de Chile, primera edición, año 2007, p. 470)".

Dadas las consideraciones precedentes, es inconcuso que las alegaciones de invalidación apoyadas en la causal impetrada resultan carentes de fundamento.



DÉCIMO SEGUNDO: Que, con todo valga reiterar, que en un recurso como el de la especie, no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad.

En la especie, la argumentación del impugnante se dirige en este sentido, a cuestionar la prueba producida por el Ministerio Público, mediante el análisis parcial de ella, -sólo de lo que interesa a la recurrente-, sin atacar -como supone la causal de nulidad en examen- los razonamientos del fallo que plasman el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Por ello, la circunstancia de no compartir el recurrente las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación, es decir, la valoración de la prueba producida, no supone automáticamente su satisfactoria impugnación por esta vía, en donde se ha denunciado un análisis erróneo de la prueba rendida, que según el impugnante contradicen los principios de la lógica, en específico la razón suficiente, extremo que no concurre pues quedó demostrado que las pruebas fueron efectivamente consideradas y valoradas, sin contradecir aquel parámetro, lo que permite la reproducción de los razonamientos utilizados para alcanzar las conclusiones a que llegó el veredicto e impide configurar que el vicio denunciado, como constitutivo de invalidación absoluta, que contempla el artículo 374 e) del Código Procesal Penal, pueda prosperar de manera que el presente recurso interpuesto, también será rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 374 e), 297 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza**



el recurso de nulidad deducido por las defensas de los acusados Dany Brian Araníbar Fernández, Ricardo Jesús Vargas Ancavil, y a Hugo Antonio Garcia Calquín en contra la sentencia de seis de enero del año en curso, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC en causa RUC 1900230549-9, RIT N° 75-2021, los que, en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Abogado Integrante Sr. Abuaud.

Rol N° 3223-22

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S, Sra. María Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Ricardo Abuaud D. No firma el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



En Santiago, a catorce de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

